

BOLIVIAPRESS ESPECIAL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS



Honduras ingresó a los titulares de prensa el 28 de junio pasado con la primicia del golpe de Estado en contra del Presidente Zelaya. El golpe -contrario a lo que la campaña mediática intenta hacernos creer, no es un hecho aislado, fortuito y con alcance apenas local.

El golpe es la respuesta violenta a la lucha de los pueblos de América por la democracia, por construir nuevos espacios políticos y por conseguir la transformación de sus sociedades. Como ocurriera en Venezuela en abril del 2002 y en Bolivia en septiembre pasado, la desestabilización

orquestrada desde las fuerzas de la reacción, es acompañada con una campaña de prensa destinada a aislar, desinformar y desvirtuar la lucha y la resistencia del pueblo.

Boliviapress dedica esta edición especial a la lucha del pueblo hondureño, ahora atacado, perseguido y masacrado, pero honrosamente de pie, en resistencia a una estrategia que no consiguió hasta ahora su objetivo en Venezuela y Bolivia y que hoy arremete en Honduras con el objetivo de poner freno al avance del movimiento social en Latinoamérica.

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS



El 28 de junio, los medios periodísticos del mundo informaron de los sucesos acaecidos esa madrugada en Honduras: cerca de doscientos militares armados irrumpieron a balazos en la casa del Presidente Manuel Zelaya, lo detuvieron y lo trasladaron en una aeronave hasta San José de Costa Rica. El presidente constitucional de Honduras había sido depuesto con un golpe de Estado que tras semanas de ejecutado y con el repudio

internacional generalizado, sigue en vigencia, sosteniendo a un régimen que en el transcurso de más de veintidós días ha desatado en el territorio hondureño la represión violenta a ciudadanos y a nivel internacional, en especial en América latina, ha revivido los fantasmas de una historia aún reciente de dictaduras imponiéndose sobre las voluntades de sus pueblos.

EL ESCENARIO QUE ANTECEDIO AL GOLPE

En el año 2006 Manuel Zelaya, miembro de una familia terrateniente del departamento de Olancho y militante del Partido Liberal Hondureño (reconocido como de centro derecha) asumió el mandato de la Presidencia de la República tras las elecciones del 2005 en las que resultó ganador bajo la promesa electoral de promover la participación ciudadana en el país.



Las diferencias entre el Presidente Zelaya y el gobierno norteamericano se evidenciaron a poco tiempo de asumido el mandato del hondureño, cuando la administración Bush le solicitó acoger al terrorista Posada Carriles. El Presidente Zelaya se negó en un acto inédito entre los gobernantes de Honduras que fue el prelude del camino hacia las reformas que el presidente hondureño emprendería, suscitando más de un sobresalto entre varios políticos norteamericanos acostumbrados a la docilidad y sumisión de la clase política hondureña.

La declaratoria gubernamental de una emergencia energética y las posteriores medidas de licitar el abastecimiento de combustibles, afectó al monopolio hasta entonces sostenido por las transnacionales petroleras Esso (ExxonMobil), Texaco (Chevron) y Shell, generando la susceptibilidad en Estados Unidos que veía riesgosa la intención de Zelaya de entablar acuerdos con Petrocaribe en el marco de la integración energética impulsada por Venezuela y el ALBA. Por otra parte la disposición de una emergencia sanitaria permitió al gobierno hondureño, buscar el abastecimiento de medicamentos genéricos para contrarrestar los exorbitantes precios impuestos por los laboratorios farmacéuticos transnacionales y se convirtió en otro llamado de alerta para la entonces administración Bush.

Fuerte alarma creó en el año 2008, la decisión de Zelaya de habilitar en la base norteamericana Soto Cano (antes Palmerola), un aeropuerto comercial con el financiamiento del ALBA. La presencia militar norteamericana en Honduras data de 1904. En 1954 es desde Honduras que se planifica y ejecuta el derrocamiento del gobierno popular de Jacobo Arbens en Guatemala. La base militar Soto Cano, o Palmerola como es conocida en Centroamérica fue instalada en territorio hondureño en los años 80 y ha sido el centro de origen de las acciones encubiertas de Estados Unidos en la región. Fue desde Palmerola que en los años 80, John Negroponete (entonces embajador de EEUU en Honduras), Otto Reich y el Coronel Oliver North condujeron los ataques militares de "La Contra" hacia territorio nicaragüense intentando derrocar al gobierno Sandinista. La base es además un centro de "escucha" desde la que se monitorea la situación política en las

naciones latinoamericanas y desde la que se articulan acciones militares en correspondencia con la necesidad norteamericana de sostener su influencia política y militar en la región. En los años 80 desde Palmerola se instruyó y se organizó a los “escuadrones de la muerte”, aparatos represivos paramilitares que asolaron El Salvador, Guatemala, Nicaragua y la propia Honduras dejando miles de muertos y desaparecidos. Es desde esa base dependiente del Comando Sur del Ejército de EEUU que se han orquestado la invasión a Granada, el secuestro de Aristide en Haití y más recientemente el golpe de Estado contra Venezuela en el año 2002.



Base Soto Cano (Palmerota) Honduras

A lo largo del mandato del presidente Zelaya, organizaciones populares de Honduras como COPINH que aglutina a organizaciones sociales e indígenas han incrementado su exigencia del cierre de la base militar Soto Cano. En junio 2008, en medio del temor generado en EEUU a que el alcance de la decisión de Zelaya de convertir la base en aeropuerto implicara su cierre y el retiro de las tropas ahí asentadas, John Negroponte -por ese entonces subsecretario de Estado de la administración Bush y ex embajador norteamericano en Honduras-, llegó a Tegucigalpa. El funcionario se reunió con el Presidente y además con personajes del Poder Legislativo y Judicial ahora impulsores del golpe de Estado. Desde entonces, las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno de Zelaya se registraron articuladas a las acciones “civiles” de los opositores en el Congreso y en los órganos de administración de justicia. De hecho esas presiones, hicieron que en el año 2008 desde las FFAA de Honduras se intentara hacer desistir al presidente Zelaya

de habilitar la base como aeropuerto, pero las presiones fueron insuficientes y en mayo del 2009, el presidente anunciaba que a partir del próximo agosto, la base ya habilitada iniciaría su funcionamiento como aeropuerto.

En septiembre del 2008, asume como nuevo embajador estadounidense en Honduras el Sr. Hugo Llorens, personaje polémico de la diplomacia republicana estadounidense, ligado estrechamente al trabajo que Negroponte y Otto Reich han desarrollado desde los años 80. El Señor Llorens, trabajó al mando de Reich como asesor sobre Venezuela en el año 2002 cuando Otto Reich de manera abierta resultó implicado en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. La llegada de Llorens a Tegucigalpa resultó humillante para el diplomático, dado que el Presidente Zelaya decidió no recibir sus credenciales en apoyo a la medida adoptada por Evo Morales de expulsar al embajador Philipp Goldberg acusado de participar en la desestabilización de su gobierno. Llorens tuvo que esperar entonces una reprogramación de su acreditación que se hizo efectiva ocho días después de lo programado. La asunción de Hugo Llorens coincide con el inicio del recrudecimiento de la campaña mediática contra Zelaya en la que sistemáticamente sería señalado como corrupto y acusado de intentar perpetuarse en el poder “al estilo Chávez”.



Hugo Llorens y Manuel Zelaya

La negativa presidencial a impulsar la privatización de la empresa de comunicaciones Hondutel, fue un escabroso escenario de confrontación entre el presidente Zelaya y la oposición interna, pero además llegó al enfrentamiento

abierto con el mismo Otto Reich que representaba a la compañía interesada en controlar Hondutel. Ante la negativa de Zelaya de aceptar el contrato con la empresa representada por Reich, éste lanzó una serie de acusaciones contra Zelaya y su gobierno que se mantuvo abierta en la prensa hondureña y la estadounidense con alto perfil, hasta que en abril del 2009, el presidente Zelaya envió una misión a Miami para contratar un bufete de abogados e iniciar juicio contra el Sr. Reich acusándolo de calumnias, difamación y de impulsar acciones oscuras y sucias en Centroamérica.



Otto Reich y George Busch

Establecidos esos antecedentes resulta evidente la tensa relación entre la administración Zelaya y los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos. Más de una duda razonable queda respecto a la participación de políticos norteamericanos en la orquestación del golpe de Estado. Acaso

eso explique la tibia reacción inicial del Presidente Obama el mismo día 28 de junio en relación a los sucesos en Honduras, a través de una declaración escrita en los siguientes términos: "Estoy sumamente preocupado por informes provenientes de Honduras sobre la detención y expulsión del Presidente Manuel Zelaya. Como lo hizo la Organización de Estados Americanos el viernes, hago un llamado a todos los actores políticos y sociales en Honduras para que respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Cualquier tensión y disputas que existan tienen que ser resueltas pacíficamente a través de dialogo sin ninguna interferencia externa". En su declaración Obama no hizo ninguna referencia al "golpe de Estado". No fue sino hasta después del generalizado apoyo de la comunidad internacional, obtenido por Zelaya que Obama modifico los términos de su posición indicando: ".El presidente Zelaya fue elegido democráticamente. No había terminado aún su mandato", declarando además: "Creemos que el golpe de Estado fue ilegal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras".

Sin embargo la ayuda militar estadounidense no fue suspendida sino hasta el 7 de julio, tras el intento frustrado el 5 de julio del Presidente Hondureño de retornar a Tegucigalpa en medio de una violenta represión con armas de fuego ordenada por el gobierno de facto a la cabeza de Micheletti contra aproximadamente 350.000 manifestantes que repudiaban el golpe y esperaban en los alrededores del aeropuerto la llegada del Presidente Zelaya.

LA CONSULTA CIUDADANA

La intención del presidente de realizar el 28 de junio, una encuesta no obligatoria y tampoco vinculante, para determinar el nivel de aprobación de la ciudadanía a la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para consultar sobre una Reforma a la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, se convirtió en el motivo público que aglutinó a la oposición enquistada en el Poder Legislativo, los órganos de justicia, las Fuerzas Armadas,

la jerarquía de la Iglesia Católica y evangélica y los sectores empresariales de Honduras.

Todos esos actores, se unieron en la ejecución de una campaña bajo el falso argumento de las intenciones del presidente de perpetuarse en el poder. El argumento se caía por su propio peso puesto que la encuesta se limitaba a preguntar sobre la posibilidad de una cuarta urna sobre el tema constitucional en

las elecciones generales de noviembre. Es más, aún cuando la respuesta del soberano el 28 de junio fuese afirmativa, las posibilidades de una reelección eran inviables puesto que la consulta se haría el mismo día en que los hondureños elegirían a su nuevo mandatario entre un grupo de candidatos entre los que Manuel Zelaya no figura como contendiente.



El argumento de inconstitucionalidad de la encuesta, tampoco tenía asidero. Ciertamente la Constitución de Honduras aprobada bajo la última dictadura militar de 1982, contiene entre sus primeros artículos lo que se conoce como disposiciones pétreas (inamovibles y sempiternas) destinadas principalmente a cerrar paso a cualquier cambio en el orden establecido. La oposición, esgrimiendo la supuesta intención de Zelaya de mantenerse en el poder, alegó insistentemente la disposición

LOS APOYOS IMPLICITOS EN LA ORQUESTACION DEL GOLPE

Sin lugar a dudas, dos momentos marcaron significativamente el destino del gobierno de Zelaya: la incorporación en el 2008 de Honduras al ALBA y la iniciativa presidencial en el 2009 de realizar la encuesta ciudadana. En esos dos momentos se identificó el potencial peligro que corrían los intereses y el poder norteamericano y el de los grupos de control económico local. El temor y el riesgo compartido llevaron a un punto de confluencia entre las acciones de los actores de primera fila y los actores ocultos tras el golpe.

En septiembre del 2008 (días antes del ingreso hondureño al ALBA y diez días después de que Hugo Llorens asumiera la Embajada Norteamericana en Tegucigalpa), el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la FFAA de Honduras, Gral.

constitucional que impide la reelección presidencial y las que establecen la imposibilidad de cambiar esa disposición bajo ningún concepto. Sin embargo, aunque la Constitución prohíbe expresamente cualquier modificación a los artículos referentes al sistema de gobierno, al territorio nacional, la reelección presidencial y a la obligatoriedad de 2/3 de votos para cambiar artículos constitucionales (Art. 374), nada especifica respecto a la instalación de una Asamblea Constituyente.

Lo cierto es que la consulta promovida por Zelaya debía ser impedida a cualquier costo. El objetivo real nunca fue anular ni aislar al Presidente: quedaban escasos meses para que su mandato terminara. Pero no podía permitirse bajo ningún concepto que en Honduras, los sectores populares, otrora exitosamente sometidos, empezaran a tomar un protagonismo peligroso. La consulta, aunque sin carácter vinculante sentaría un precedente de alto riesgo, sobre todo en el actual escenario Latinoamericano de emergencia de gobiernos progresistas o de izquierda que buscan niveles nuevos de integración y de independencia relativa respecto de Estados Unidos, ese nuevo escenario incluye a los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala en la región centroamericana, con respetable apoyo popular.

Romeo Vásquez (el mismo que detuvo a Zelaya y lo deportó el 28 de junio y que días antes se negara a cumplir la orden de distribuir el material de la consulta), denunciaba en Radio HRN que “personas interesadas buscan deponer al presidente Zelaya” por su cercanía con los presidentes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los rumores de golpe de Estado fueron adquiriendo cada vez más factibilidad, refrendados por las declaraciones no solo de los opositores nacionales, sino y sobre todo, por las declaraciones y acciones de funcionarios de la administración estadounidense. La propia Hillary Clinton a principios de junio de 2008, en el marco de la reunión de la OEA manifestó a Zelaya no estar de acuerdo con la realización de la consulta en las elecciones generales de noviembre.



Más explícito fue el embajador Hugo Llorens en su convergencia con los argumentos de los opositores hondureños, cuando el 6 de junio declaró “no se puede violar la constitución para crear otra Carta Magna porque eso sería como vivir en la jungla”. Luego añadió “lo que se haga que se haga dentro de la ley; si se hace o no se hace una variante de lo que estamos hablando, que se haga dentro de la ley, dentro de la Constitución”.

El 30 de junio el periódico New York Times daba cuenta de las declaraciones de funcionarios del departamento de Estado en el sentido que “no creían que ese plebiscito fuera constitucional”.

Que los funcionarios norteamericanos sabían del golpe no parece ya estar en

duda. El 22 de junio, el periódico La Prensa de Honduras reportaba que el embajador Hugo Llorens se había reunido con políticos y jefes militares hondureños para buscar una solución a la crisis causada por el Referéndum. El New York Times del 30 de junio, cita a un funcionario anónimo del Departamento de Estado que dio más aclaraciones sobre lo tratado en esas reuniones: ahí se precisó sobre cómo se sacaría al Presidente, cómo se lo arrestaría, cuál autoridad estaría a cargo, pero el funcionario aseguró que todas las conversaciones se redujeron a las maneras legales para remover al Presidente y no se referían a un golpe de Estado.

Las declaraciones de Otto Reich en el Congreso, fueron coherentes con su decisión de terminar con el peligro que Zelaya representa –según él- en el continente; dijo no considerar un golpe de Estado lo acontecido en Honduras: “esas acciones rescataron la democracia al evitar que Zelaya estableciera el tipo de régimen de ‘socialismo del siglo XXI’ que se instaura en países de América Latina bajo el Alba.” A sus declaraciones se unieron las de otros personajes y congresistas ligados con los sectores más conservadores de la política norteamericana.

EL SEGUNDO GOLPE: LA NEGOCIACION

El régimen de facto hondureño, repudiado por la generalidad de los gobiernos mundiales y enfrentado a una férrea y constante movilización popular en su contra al interior de Honduras, ha desatado una represión feroz que incluye, asesinatos, detenciones ilegales, expulsión de periodistas, persecución de los allegados a Zelaya y de los dirigentes sociales que se han aglutinado en un solo frente de resistencia en el que se movilizan diariamente miles de maestros, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas y otros sectores de la población.

El 5 de julio, el presidente Zelaya emprendió vuelo hacia Tegucigalpa en un anunciado pero frustrado intento de ingresar al país. Una masiva marcha de pobladores llegados de varios puntos de Honduras avanzó con cerca de 350.000 personas hacia el aeropuerto y con la declarada intención de garantizar la llegada

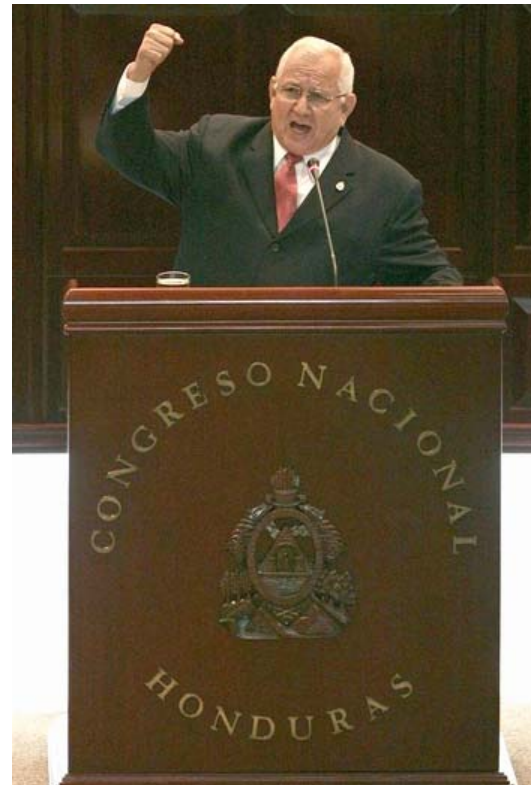
del Presidente. La represión en el aeropuerto se desató, francotiradores dispararon armas de fuego contra los manifestantes mientras eran secundados por otros oficiales que lanzaban bombas lacrimógenas, aproximadamente tres muertos se produjeron en los incidentes; en tanto los medios de prensa registraban cerca de 800 detenidos y en medio de un toque de queda adelantado sin previo aviso, fuerzas policiales desplegaban la persecución de los manifestantes. El presidente no consiguió aterrizar: la pista estaba tomada por los militares y era obstaculizada por camiones. La OEA ratificó su apoyo al Presidente y las exigencias hacia EEUU para adoptar medidas firmes contra el régimen golpista se acompañaron con las sospechas de la participación norteamericana en la orquestación del golpe.



Zelaya asistió a una reunión con Hillary Clinton quien volvió a ratificarle su apoyo y ante el anuncio de la llegada de una delegación del régimen de Micheletti aclaró que solo sostendría reuniones con el Presidente Constitucional. Barak Obama, desde Rusia ratificó su repudio al golpe de Estado. Se esperaban medidas de la administración estadounidense para presionar contundentemente al gobierno de facto. Mientras, desde San José, Oscar Arias anunciaba su disposición a oficiar de mediador e intentar una solución negociada al conflicto. Con ello, la verdadera posición estadounidense parecía clara: de la reunión entre Clinton y Zelaya, poco podría esperarse, a no ser la presión de la Secretaría de Estado sobre el Presidente Zelaya para lograr un prolongamiento de la situación, el oxigenamiento del régimen golpista y la permanencia indefinida del presidente en el exilio, a través de la imposición de una ilegítima instancia de negociación.

Así fueron las cosas. La primera reunión de Arias con las delegaciones enfrentadas no arribó a nada y terminó definiendo una nueva reunión para el sábado 18 de julio. Ese día Oscar Arias presentó una propuesta denigrante para el gobierno de Zelaya y para el pueblo de Honduras, pues aunque se establecía como punto uno su restitución en la presidencia, se le exigía al mismo tiempo formar un gobierno de unidad, amnistiar a los golpistas, renunciar expresamente a la realización de la consulta, poner a las FFAA al mando de la Corte Electoral antes de las elecciones que se adelantarían a octubre y la aceptación

de una comisión de verificación de los acuerdos integrada principalmente por miembros de la OEA. Otro golpe había sido dado: el retorno del Presidente sin derecho a la realización de la consulta era otra manera de capitular. Las resoluciones de la OEA y la ONU exigiendo la restitución del gobierno constitucional de Honduras sin condicionamientos, había sido desechada.



Roberto Micheletti

A pesar de ello, Zelaya aceptó con el único condicionamiento de la inicial aceptación de su restitución hasta el 24 de julio para continuar dialogando sobre los otros puntos de la propuesta. La delegación golpista solicitó un cuarto intermedio hasta el día siguiente. Desde Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador, se advirtió de una trampa norteamericana para alargar la situación bajo el pretexto de las negociaciones. Los presidentes del ALBA no solo no confiaban en las gestiones de Oscar Arias, sino que revivían el papel del costarricense en el otrora grupo Contadora que en los años 80 se instaló en Centroamérica pretendiendo una negociación para la pacificación de la región pero en la que el ahora Presidente Arias fue reiteradamente acusado de ser pieza de ajedrez en el tablero de los intereses norteamericanos.



Oscar Arias y George Busch

Desde el sábado, mientras en Costa Rica el movimiento popular se concentraba en torno a la sede de las negociaciones y descalificaba las gestiones de Oscar Arias por ilegítimas, en Nicaragua, Guatemala y El Salvador sectores sociales se movilizaron hasta las fronteras con Honduras para unirse al bloqueo que el pueblo hondureño sostiene como medida de presión económica al régimen golpista. El golpe de Estado en Honduras se ha vuelto una amenaza en toda la región y los pueblos centroamericanos saben el peligro que se cierne sobre sus territorios si llegara a consolidarse. Si en las negociaciones Zelaya fuese restituido bajo las condiciones de Arias, se habría conseguido legitimar la acción golpista, aislar el programa reformista presidencial, eliminar la consulta popular y afianzar el poderío estadounidense sobre el istmo centroamericano. En todo caso, el tiempo parece ser la carta que los norteamericanos pretenden jugar a favor de los golpistas y en defensa de sus propios intereses hegemónicos. Prolongar el desenlace de la situación solo va en detrimento de las demandas populares. Basta dar el suficiente tiempo a las alternativas negociadoras, para que las fechas de elecciones se aproximen antes que Zelaya sea restituido en el poder y el objetivo se habría conseguido ya que el peligro de instalar una cuarta urna para definir la pertinencia o no de la constituyente habría conseguido ser sorteado pues no estaría precedida de la consulta previa con la que se pretendía darle legitimidad.

El domingo la delegación de Micheletti se presentó con una contrapropuesta en la que aceptaba el ingreso de Zelaya a Honduras pero con el único objeto de enfrentar los cargos levantados en su contra. Al final de la ronda de conversaciones, la delegación de Micheletti

anunció al Presidente Arias que su propuesta era inaceptable y que se la consideraba una injerencia en los asuntos internos de Honduras. La Ministra de Energía del gobierno de Zelaya comunicó la decisión de su Presidente de dar por terminada la negociación aunque mantuvo su disposición a mantenerse a la expectativa de los resultados que Arias pudiese conseguir en un plazo de 72 horas que éste solicitó para intentar recomponer el espacio de concertación.



Más tarde Manuel Zelaya, acompañado por un dirigente del Comité de Resistencia anunció su ingreso a Honduras en los próximos días. El Secretario de la OEA Miguel Insulza lamentó la actitud de la delegación de Micheletti, advirtió del riesgo latente de guerra civil, anunció una reunión de la OEA para evaluar y definir acciones y ratificó la propuesta de Oscar Arias como viable para dar una salida aceptable a la situación del país centroamericano.

En Honduras, la población expectante durante las negociaciones, inició una asamblea en la que adoptó resoluciones importantes: la movilización contra el régimen de facto no tendrá descanso, se

incrementará a lo largo y ancho del territorio nacional. La exigencia de retorno del presidente hecho por el Comité de Resistencia y sus bases está indisolublemente ligada a la exigencia de

realización de la consulta popular. En eso y en la demanda de castigo a los golpistas que han reprimido y asesinado al pueblo no hay posibilidad alguna de ceder.